

BOLETIN OFICIAL.



PROVINCIA DE ORENSE.

PRIMERA SECCION.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA.

DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. el Rey (Q. D. G.), la Serma. Sra. Princesa de Asturias, las Sermas. Sras. Infantas Doña Maria del Pilar, Doña Maria de la Paz, Doña Maria Eulalia, y los Serenísimos Sres. Duques de Montpensier, continúan en el Real Sitio de San Lorenzo sin novedad en su importante salud.

(Gaceta núm. 189.)

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REALES ORDENES.

Remitido informe del Consejo de Estado el recurso de alzada interpuesto por los señores D. Miguel y D. Jaime Moragues contra un acuerdo de esa Comisión provincial relativo a la alineación de la plaza del Mercado en la ciudad de Palma, la Sección de Gobernación de dicho alto Cuerpo ha emitido el siguiente dictamen:

Excmo. Sr. Esta Sección ha examinado el recurso de alzada interpuesto por D. Miguel y D. Jaime Moragues contra un acuerdo de la Comisión provincial de las Baleares respecto de unas casas de propiedad de aquellos, situadas en la plaza del Mercado en la ciudad de Palma.

Resulta que aprobado por la Municipalidad en el año de 1860 el plano para la reforma de aquella parte de la población, y formalizadas contra él varias reclamaciones, se devolvió en virtud de Real orden de 5 de Febrero de 1862 al Gobernador para que se cumpliesen clie-

las prevenciones de la Junta consultiva de Policía urbana, cuya Corporación extrañó que se hiciera caso omiso de las indicadas reclamaciones. Elevado de nuevo al Gobierno el proyecto, se aprobaron por Real orden de 9 de Febrero de 1863 las alineaciones para la referida plaza del Mercado, propuestas por el Arquitecto provincial y aceptadas por el Ayuntamiento, con arreglo a las cuales había de quedar destinada a vía pública toda la superficie ocupada por la manzana núm. 172. Desde entonces los hermanos Moragues presentaron al Ayuntamiento repetidas instancias y con distintas prevenciones, aunque todas dirigidas a la defensa de sus intereses, siendo resumen de todas ellas la de 16 de Marzo de 1874, en que proponían con tal objeto la adopción de uno de estos cuatro medios: primero, la permuta de sus casas por el solar edificable en la misma plaza del Mercado; segundo, el justiprecio de sus fincas en su actual estado, obligándose el Ayuntamiento a satisfacer el importe el día que pudiese o le conviniese adquirirlas; y cuarto, que se les permitiese practicar todas las obras de consolidación y conservación que les pareciera, quedando a cargo del Ayuntamiento escoger el momento de expropiación.

Desestimó el Ayuntamiento esta instancia, fundado en que el plano de la plaza del Mercado y calle de la Unión era el que mejor correspondía a la importancia de aquella vía, que la permuta había sido ya negada por no considerarse conveniente ni haber pensado el Municipio destinar para edificación terreno alguno en la plaza del Mercado, y no estar tampoco en sus atri-

buciones acceder a la permuta, por tener que venderse en pública subasta los solares, a tenor del Real decreto de 29 de Setiembre de 1849; que no era procedente hacer el justiprecio de la finca hasta el día en que debiera efectuarse la mejora; y por último, que, estando sujeta aquella a nueva alineación, no se podía permitir ninguna obra de consolidación con arreglo a la Real orden de 9 de Febrero citada.

De esta resolución apelaron los interesados ante la Comisión provincial en 11 de Mayo de 1874, la cual no dictó su fallo hasta el 12 de Enero de 1877 porque, habiendo tenido conocimiento del juicio ordinario promovido contra el Ayuntamiento por los interesados, aplazó, según dice, la decisión por no dividir la continencia del asunto.

Conocido el fallo de los Tribunales, contrario a las pretensiones de los hermanos Moragues, por tratarse de un negocio administrativo, la Comisión provincial, fundada en las mismas razones que el Ayuntamiento, desestimó el recurso, y mas tarde otro que los mismos interesados elevaron con motivo de un incidente surgido sobre exhibición del plano y expedición de un certificado: que no conformándose aquellos con lo resuelto, recurrieron en alzada al Gobierno, al cual habían ya elevado diferentes instancias sobre el propio asunto, solicitando por último en 16 de Agosto de 1877, no solo la revocación de aquellos fallos, dictados sin que precediese el anuncio que a tenor del art. 64 de la ley debe insertarse en el Boletín oficial, sino también la nulidad del expediente y plan relativo al proyecto de reforma, y la cancelación de la Real orden de 9 de Febrero de 1863 que le aprobó, mediante que, según dicen, el número de Concejales que tomaron parte en la votación y constituyeron la mayoría no era el que correspondía con arreglo a la población.

La Sección cree improcedente la solicitud de los interesados en cuanto pretenden se deje sin efecto la Real orden que aprobó el plano de reforma de la plaza del Mercado, pues además de no justificar de modo alguno las faltas que ahora denuncian en cuanto a la constitución y mayoría del Ayuntamiento, examinados en su día por ese Ministerio todos los antecedentes del asunto antes de dictar resolución, ni entonces ni después expusieron nada respecto de los defectos que ahora dicen habidos en el expediente instruido para la indicada reforma.

Pero si respecto de este punto son impertinentes cuantas consideraciones alegan los hermanos Moragues, no sucede lo mismo en cuanto a la impugnación que hacen de los acuerdos del Ayuntamiento y Comisión provincial, en que se desestiman por completo sus pretensiones, encaminadas a salvar sus intereses lastimados a consecuencia de la proyectada reforma.

Las principales razones en que la Comisión fundó su acuerdo fueron la de que era potestativo en los Ayuntamientos llevar a efecto la nueva alineación de una calle, ya por medio de la expropiación forzosa por causa de utilidad pública, o ya haciendo entrar paulatinamente en línea las casas a medida que fuesen construyéndose o reedificándose, según lo dispuesto en la Real orden de 9 de Febrero de 1863.

La Sección cree improcedente la solicitud de los interesados en cuanto pretenden se deje sin efecto la Real orden que aprobó el plano de reforma de la plaza del Mercado, pues además de no justificar de modo alguno las faltas que ahora denuncian en cuanto a la constitución y mayoría del Ayuntamiento, examinados en su día por ese Ministerio todos los antecedentes del asunto antes de dictar resolución, ni entonces ni después expusieron nada respecto de los defectos que ahora dicen habidos en el expediente instruido para la indicada reforma.

1863, y que en las casas sujetas a nueva alineación no podían ejecutar sus dueños ninguna obra que condujese a consolidarlas, por prohibirlo la citada Real orden; pero la Sección entiende que lo mismo el Ayuntamiento que la Comisión provincial han hecho una indebida aplicación de aquella Real orden, la cual, según claramente expresa, se refiere a las casas que por consecuencia de una nueva alineación han de avanzar o retroceder, sin que nada diga acerca de las que con motivo de una obra de embellecimiento hayan de desaparecer por completo.

No es necesario detenerse a demostrar las esenciales diferencias que existen entre una finca que, si bien sujeta en virtud de una nueva alineación a ganar o perder terreno, se conserva el derecho a que exista, tiene siempre valor y puede ser por consiguiente objeto de comercio, y la que comprendida, no en una simple alineación, sino en la reforma completa de una calle o parte de la población, debe desaparecer, desde cuya declaración su valor disminuye y hasta deja de ser objeto de contratación, pues nadie ha de querer ya adquirir lo que no puede conservar por estar destinado a desaparecer.

Lo primero solo implica una limitación de la propiedad, mientras lo segundo representa una verdadera expropiación; y por mas que el Ayuntamiento dice en su informe que no está obligado a llevarla a efecto en un momento determinado, y que el perjuicio indicado es consecuencia de esta clase de propiedad, no puede desconocerse la exactitud del razonamiento de los interesados al manifestar que, puesto que ni se los expropia ni se les permite hacer ninguna obra para la conservación de sus fincas, se les condena a ver caer aquellas para no obtener en su día mas indemnización que la del solar, con evidente perjuicio de sus intereses.

Si la manzana de que se trata debe desaparecer y convertirse en vía pública, esta misma circunstancia demuestra que con relación a las fincas en ella comprendidas no existe propiamente una alineación a que hayan de sujetarse; y siendo esto así, no puede menos de inferirse que la repetida Real orden carece de aplicación, puesto que solo se refiere a las casas que hayan de avanzar o retroceder a consecuencia de nuevas alineaciones aprobadas; y como la obra de embellecimiento que se trata de ejecutar lleva consigo la destrucción o inutilización completa y absoluta de las fincas de Moragues, de aquí que el Ayuntamiento no pueda invocar las prescripciones de la referida Real orden, sino que está obligado a proceder como en un caso ordinario de expropiación por causa de utilidad pública cuando estime oportuno y conveniente realizar el proyecto, pero sin oponerse entre tanto a que en las fincas de dicha manzana se hagan todas las obras que sus dueños deseen, puesto que, como ya se ha dicho, ni a ello obsta la Real orden de

9 de Febrero de 1863, ni además sería justo condenar a los referidos propietarios a que, dejando de practicar toda obra de consolidación, viesen arruinarse rápidamente sus fincas, sin obtener luego otra indemnización que el valor del solar que había de convertirse en vía pública.

Dice el Ayuntamiento en su informe que no debe confundirse, como lo hacen los interesados, un expediente de alineación y reforma con los de expropiación sujetos a la ley de 1836, por que esta se refiere a las expropiaciones causadas por la voluntad de las Autoridades y Corporaciones, y no a las impuestas por la fuerza; pero sobre no existir en la ley citada tal distinción, fácil sería demostrar que, lo mismo cuando el Estado proyecta o construye una obra que cuando un Ayuntamiento acuerda o ejecuta la reforma de calles o plazas, proceden siempre por un acto de su voluntad, inspirado en razones de utilidad y conveniencia pública, cuya consideración les faculta para disponer de la propiedad privada, previa indemnización y con sujeción a las leyes; sin que acerca del particular haya ninguna razón legal que sancione y legitime la distinción que el Ayuntamiento establece.

Por lo demás, decir que es una condición de la propiedad urbana sobrellevarla acción municipal en materia de alineaciones y de reformas, y que lo que los hermanos Moragues llaman perjuicio no es otra cosa que la expropiación directa de la naturaleza de toda propiedad enclavada en una población, es un razonamiento que solo es exacto y puede admitirse en cuanto a la obligación que tienen los propietarios de acomodarse a los proyectos debidamente aprobados, y también al establecimiento en la Real orden de 9 de Febrero de 1863, pero nada de esto autoriza para dar a esta disposición una extensión que no tiene, ni para dejar de expropiar a los interesados e indemnizables en los casos en que proceda.

Y para demostrar que no cabe prescindir de la ley de Expropiación forzosa de 17 de Julio de 1836, bueno es recordar que la de 22 de Diciembre de 1876 declara en su artículo 1.º que son obras de utilidad pública para los efectos de aquella las de ensanche de las poblaciones en lo que se refiere a calles, plazas, mercados y paseos; añadiendo en su disposición transitoria que ciertas disposiciones de la misma regirán respecto de las expropiaciones de los edificios que se lleven a cabo en el interior de las poblaciones mientras no se haga una vez mas que no es la Real orden de 9 de Febrero de 1863 la que ha de aplicarse a este caso, sino la ley de Expropiación forzosa.

Resumiendo lo expuesto, opina la Sección:

1.º Que la Real orden de 9 de Febrero de 1863 no tiene aplicación al caso que a consecuencia de la reforma de una parte de la población haya de desaparecer alguna casa.

2.º Que en tal circunstancia, mientras no se expropie a los

interesados con arreglo a la ley, no puede privarseles de la facultad de hacer las obras de conservación que estimen necesarias en sus fincas.

3.º Que procede, en su consecuencia, dejar sin efecto el acuerdo de la Comisión provincial, contra el cual se reclama.

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.) con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 22 de Junio de 1878.—Romero Robledo.—Sr. Gobernador de la provincia de las Baleares.

(Gaceta núm. 192).

Remitido a informe del Consejo de Estado el recurso de alzada interpuesto por D. Isidro Rodríguez contra un acuerdo de esa Comisión provincial, que confirmó otro del Ayuntamiento de Vegamian sobre concesión a D. Fernando Arenas de un terreno sobrante de la vía pública, la Sección de Gobernación de aquel alto Cuerpo ha emitido el siguiente dictamen:

Excmo. Sr.: En cumplimiento de la Real orden de 13 del mes pasado, ha examinado la Sección el expediente promovido por don Isidro Rodríguez contra un acuerdo de la Comisión provincial de León, que confirmó otro del Ayuntamiento de Vegamian sobre concesión a D. Fernando Arenas de un terreno sobrante de la vía pública.

Solicitada por este interesado tal concesión, el Ayuntamiento, previo informe de una comisión que reconoció el terreno, acordó acceder a ella, y ordenó al propio tiempo que aquel fuera tasado por peritos y que se publicara el acuerdo por si se quería presentar alguna reclamación.

El terreno, considerado como parcela sobrante de la vía pública, fué valuado en 15 pesetas a causa de estar gravado con varias servidumbres.

D. Isidro Rodríguez Pelaez se opuso a la concesión en la forma en que se había verificado; y alegando que el terreno libre de toda carga valia 250 pesetas, solicitó que se anunciara la venta bajo ese tipo en pública subasta por no poder ser enajenado libremente.

Desestimada la instancia, el reclamante interpuso recurso de alzada ante la Comisión provincial, al mismo tiempo que Arenas solicitaba de la misma que aprobase la cesión del terreno.

La Comisión provincial, teniendo en cuenta que el terreno estaba dentro del casco de la población; que media una extensión de 21 metros de longitud y 11 de latitud; que era sobrante de la vía pública, y que si bien estaba gra-

vado con una servidumbre a favor de D. Domingo y de D. Manuel Diaz, había mediado un convenio entre estos y Arenas; y considerando por tal lo que el Ayuntamiento no infringía ley alguna, acordó desestimar el recurso, dejando a salvo el derecho de los interesados para que reclamasen ante quien y en la forma que creyeran conveniente.

Contra esta providencia se ha interpuesto recurso de alzada ante el Ministerio del digno cargo de V. E.

Según el informe del Director de Obras provinciales que se ha unido al expediente por orden de la Dirección general de Política y Administración, el terreno en cuestión mide una superficie de 270 metros cuadrados, y puede constituir un buen solar para edificar.

Esta circunstancia influye poderosamente en la resolución del expediente.

En efecto, las Reales órdenes de 13 de Mayo de 1875 y 25 de Febrero último, dictadas de conformidad con el parecer de esta Sección, sientan la jurisprudencia de que, cuando las parcelas que se tratan de enajenar no constituyan por si un solar a propósito para edificar, pueden ser cedidas a los dueños de los terrenos colindantes sin necesidad de las solemnidades de subasta, puesto que a causa de su pequeña extensión nadie mas que estos las pueden utilizar; pero cuando las parcelas forman por si solares a propósito para la edificación, entonces, si bien en virtud de lo dispuesto en la ley municipal pueden ser vendidas exclusivamente por los Ayuntamientos, estos no están exentos de cumplir con lo dispuesto en el Real decreto de 28 de Setiembre de 1849, y tienen que cumplir las solemnidades relativas a la subasta, toda vez que la palabra *exclusivamente* que la ley emplea se refiere solo a que no se necesita la aprobación superior.

Infringió, por tanto, el Ayuntamiento de Vegamian la ley al adjudicar sin previa subasta a don Fernando Arenas el terreno contiguo a la casa de esta, y por tal motivo la Comisión provincial al revisar el acuerdo no debió desestimar el recurso que ante ella se interpuso.

Fundada en estas consideraciones, la Sección opina que debe dejarse sin efecto el acuerdo apelado.

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.) con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 10 de Junio de 1878.—Romero y Robledo.

Sr. Gobernador de la provincia de León.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

REAL DECRETO.

Vista la exposición elevada por la Sala de lo criminal de la Audiencia de Burgos, en la que, conforme a lo prescrito en el artículo 2.º del Código, propone que la pena de ocho años y un día de presidio mayor y 1.000 pesetas de multa impuesta a D. Sixto Hazas en la causa que se le siguió por haber enmendado la fecha de una notificación, se le conmute por la de seis meses y un día de prisión correccional.

Considerando que, atendida la índole del delito de falsedad perseguido en el proceso y el ningún daño que por él se causó, resulta de la rigurosa aplicación del Código notablemente excesiva la pena impuesta:

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la ley provisional de 18 de Junio de 1870, que dictó reglas para el ejercicio de la gracia de indulto;

De acuerdo con lo consultado por el Consejo de Estado y con el parecer de mi Consejo de Ministros.

Vengo en conmutar la pena de ocho años y un día de presidio mayor que en la causa de que va hecho mérito se impuso a D. Sixto Hazas por la de seis meses y un día de prisión correccional.

Dado en el Real Sitio de San Lorenzo a siete de Julio de mil ochocientos setenta y ocho.—Alfonso.—El Ministro de Gracia y Justicia, Fernando Caldeón y Collantes.

Gaceta número 196.

MINISTERIO DE HACIENDA.

REALES ORDENES.

Excmo. Sr.: Vista una instancia de D. Nicolás Lorenzo Laríos, vecino de Adra, en la provincia de Almería, solicitando se habilite el punto llamado de Guaynos, distante media hora de aquella población, para el embarque y desembarque de aguardientes y vinos y sus envases con destino y producto respectivamente de una fábrica de aguardientes que tiene establecida en aquel punto, toda vez que la comunicación terrestre entre Adra y dicha fábrica es difícil por falta de caminos transitables, y se hacen excesivos los gastos de transporte de los expresados líquidos:

Vistos los informes emitidos por el Jefe de la Administración económica de Almería, Administrador principal de Aduanas, Jefe de la Comandancia de Carabineros y Junta de Agricultura, Industria y Comercio:

Considerando que se trata de salvar el inconveniente que ofrece

el transporte terrestre desde Adra a la fábrica de Guaynos y viceversa de los caldos que produce y necesita la misma fábrica, por lo que la pretensión está reducida a la carga y descarga de cabotaje:

Y considerando que con la concesión solicitada se favorecerán los intereses del país sin que los de la Hacienda se perjudiquen, puesto que las indicadas operaciones de carga y descarga que en el punto de Guaynos se practiquen pueden ser vigiladas por el Resguardo.

S. M. el Rey (Q. D. G.), de conformidad con lo propuesto por V. E., se ha servido ordenar que se habilite el punto llamado de Guaynos, en la provincia de Almería, para la carga de aguardientes y sus envases, y para la descarga de los vinos y sus envases que se destinen a la fábrica de aguardientes allí establecida, ambas operaciones de cabotaje, con documentación de la Aduana de Adra y bajo la vigilancia del Resguardo de Carabineros situado en la inmediación del punto habilitado.

De Real orden lo digo a V. E. para los efectos correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27 de Junio de 1878.—Orovio.—Sr. Director general de Aduanas.

Excmo. Sr.: Vista la instancia de varios fomentadores de pesca y salazon de los puertos de Vicedo y Cillero, en la provincia de Lugo, en solicitud de que se amplíe la habilitación de los mismos puertos para el desembarque de sal y otras primeras materias y efectos del Reino que son necesarios para aquella industria.

Vistos los informes emitidos por el Jefe de la Administración económica de la provincia, Administrador principal de Aduanas y subalterno de la de Vivero, Jefe de la Comandancia de Carabineros y Junta de Agricultura, Industria y Comercio, cuyos informes resultan favorables a la concesión:

Considerando que los puntos de Portiño de Morás y playa de Burela, en la provincia de Lugo, y los de Bares y Barquero, en la de la Coruña, que se hallan en iguales condiciones que Vicedo y Cillero, tienen la habilitación que para estos se pretende:

Y considerando que las operaciones de descarga pueden vigilarse por el Resguardo de Carabineros de Vicedo y Cillero, como lo han sido hasta aquí las de carga que se vienen practicando, por lo que estarán suficientemente asegurados los intereses de la Hacienda:

S. M. el Rey (Q. D. G.), de conformidad con lo propuesto por V. E., se ha servido disponer se

amplíe la habilitación de los puertos de Vicedo y Cillero, en la provincia de Lugo, para el desembarque de sal y otras primeras materias y efectos del Reino que sean necesarios para la industria salazonera, con autorización de la Aduana de Vivero y bajo la vigilancia del Resguardo de Carabineros.

De Real orden lo digo a V. E. para los efectos correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30 de Junio de 1878.—Orovio.—Sr. Director general de Aduanas.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

Circular.

El Ilmo. Sr. Director general de Establecimientos penales me dice con fecha 14 de Junio último lo que sigue:

GOBIERNO DE PROVINCIA.

SECCION DE FOMENTO.

Plan de Portazgos de la provincia de Orense aprobado por Real orden de 2 del actual.

Nombres de los portazgos.	Emplazamiento. Kilómetro.	Arancel que corresponde. Miríametros.
<i>Carretera de primer orden de Villacastin á Vigo.</i>		
Gudiña.....	444	2
Puente del Navallo.....	458	2,5
Albarellos.....	487	2,5
Ababides.....	507	2,5
Cuesta de San Marcos.....	529	2,5
Puente Mayor de Orense.....	555	2,5
Rivadabia.....	585	2,5

Carretera de primer orden de Barbantiño a Pontevedra.

Maside.....	578	2
Paraño.....	602	2

Carretera de segundo orden de Ponferrada a Orense.

Puente Petin.....	62	1
Puente Bibey.....	77	2
Alto de Cerdeira.....	98	2
Puente Meao.....	123	2,5
Santa Baya.....	149	2,5

Carretera de segundo orden de Orense a Santiago.

Carballeda.....	34	2,5
-----------------	----	-----

Carretera de tercer orden de Pueblo del Brollon a Orense por Monforte.

La Granja.....	52	2
----------------	----	---

Carretera de tercer orden de Verín a Chaves.

Tamaguelos.....	8	1,5
-----------------	---	-----

Lo que hago público por medio de este periódico oficial según se me previene. Orense 17 de Julio de 1878.—El Gobernador, Bartolomé Molina.

CUARTA SECCION.

ADMINISTRACION ECONOMICA DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Negociado de Contribuciones.

Terminada la matricula de la

contribucion industrial y de comercio de esta capital, correspondiente al presente año económico de 1878-79 queda expuesta al público en el local que ocupan estas oficinas a contar desde la fecha para que los interesados no

agregados, puedan enterarse de las cuotas que se les figuran con arreglo a Instrucción.

Orense 19 de Julio de 1878.—
El Jefe económico, Angel Guerra.

QUINTA SECCION.

AYUNTAMIENTOS.

Padrenda.

Terminado el reparto de la contribucion territorial para el año de 1878 a 79, se halla expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento para que los contribuyentes comprendidos en él puedan enterarse de sus cuotas dentro del término de ocho días, transcurridos los cuales no se oirán sus reclamaciones por mas justas que sean.

Padrenda Julio 11 de 1878.—
El Alcalde, José Maria Nóvoa.

Cea.

El repartimiento de la contribucion territorial para el año económico de 1878-79, queda expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por término de ocho días, durante los cuales pueden los contribuyentes enterarse de las cuotas que les han correspondido y reclamar lo que a su derecho convenga, pasados los cuales no será oída reclamacion alguna.

Cea 14 de Julio de 1878.—El
Alcalde, Francisco Noguero.

Rubiana.

Por término de ocho días siguientes al de la insercion de este anuncio en el Boletín oficial de la provincia, se hallará expuesta al público en la sala del Ayuntamiento, de ocho a doce de la mañana, el reparto de la contribucion territorial para el corriente año económico de 1878 a 79; en cuyo plazo se oirán y decidirán segun proceda las reclamaciones de agravios que se presenten respecto a la distribucion de cuotas, apéribidos de que pasado dicho término serán desestimadas las que se promuevan.

Real 14 de Julio de 1878.—El
Alcalde, José Barrio.

Beariz.

Terminado por la Junta el reparto de consumos, cereales y sal de este distrito para el año de 1878-79, se halla expuesto al público, clasificado a cada cual con las unidades que le corresponden en la Secretaría de este Ayuntamiento y por el término de ocho días, dentro de los cuales

se oirán y decidirán las reclamaciones que se presenten, pasado que sean no se oirá ninguna por mas que sea justa.

Beariz Julio 15 de 1878.—El
Alcalde, Bernardo Otero.

Baños de Molgas.

Terminado el repartimiento de la contribucion territorial para el corriente año económico de 1878 a 79, queda expuesto al público por espacio de ocho días en la Secretaría de este municipio, durante cuyo término se oirán cuantas reclamaciones sean aducidas contra las cuotas señaladas a los sujetos en él comprendidos.

Baños de Molgas Julio 15 de 1878.—El Alcalde, Baltasar Maside.

Arnoya.

El repartimiento del impuesto de consumos y la sal de este municipio para el actual año económico de 1878 a 79, se hallará expuesto al público en la Secretaría del mismo por término de ocho días, a contar desde el siguiente al en que aparezca este anuncio en el Boletín oficial de la provincia, a fin de que los contribuyentes puedan enterarse de sus cuotas y producir las quejas de agravio que tengan por conveniente; pues pasado dicho término no serán oídos.

Arnoya Julio 17 de 1878.—El
Alcalde-Presidente, Bernardo Cao.

SETIMA SECCION.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA.

Don Alfonso XII, por la gracia de Dios, Rey constitucional de España, y en su nombre D. Domingo Salazar, Juez del partido de Orense:

Hace notorio: que por el oficio del infrascrito Escribano se instruye causa sobre la muerte de un pordiosero conocido por Manuel Pelayo, acaecida la tarde del 5 de Junio último, atropellándole un carrromato en el Puente mayor, distrito de Canedo, en donde dicho mendigo que se dice, procedente de la Inclusa solia estar de continuo mendigando la caridad pública, no habiéndose podido averiguar a quien habia de ofrecerse la causa, se acordó hacerlo a medio de edictos; y en su consecuencia por el presente se ofrece el procedimiento a los parientes mas próximos del mismo u otro cualquiera a quien corresponda, a fin de que si quieren mostrarse parte o tuvieren que exponer en el sumario pendiente sobre el particular, lo verifiquen dentro del término de veinte días siguientes a la insercion de éste en el Boletín oficial

de la provincia, ad vertidos de que transcurrido aquel término sin apersonarse, seguirá la tramitacion de las diligencias con la correspondencia. Orense Julio 16 de 1878.—Domingo Salazar.—Gabriel Sotelo.

Don Francisco (Cadorniga, Escribano del Juzgado de primera instancia de Ganzo de Limia.

Por providencia de ayer, dictada por el Sr. Juez de la primera instancia de este partido, en causa que se instruye contra Dionisio Rodriguez, de la aldea del Molino, y Serapio Cid del Vieiro, sobre robo, se acordó que, mediante se ignoraba el hijo paradero de Francisco Gomez, de Rosen, por haberse ausentado a las siegas de Castilla, se le cite por medio de cédula que se inserta en el Boletín oficial de esta provincia y Gaceta de Madrid a fin de que dentro del término de ocho días comparezca ante este Juzgado, con objeto de rendir declaracion en la causa de que va hecho mérito, con la obligacion de concurrir oajo la multa de 50 pesetas.

Ganzo 16 de Julio de 1878.—
Francisco Cadorniga.

Don Benito Rodicio y Gomez, Licenciado en Derecho Civil y Canónico y Escribano actuario en el Juzgado de primera instancia de la Puebla de Trives.

Por la presente y en virtud de providencia dictada en el día de hoy por el Sr. D. Juan Diaz de la Rocha, Juez de primera instancia del mismo, en sumario criminal que se halla instruyendo a mi testimonio sobre averiguacion de los autores de las lesiones inferidas a Fernando Gonzalez, de Cordelle, término municipal de Montederramo, en este partido la noche del día 1.º de Setiembre de 1876, se llama, cita y emplaza a aquel y a su padre Benito, cuyo actual paradero se ignora, para que dentro de diez días que comienzan a contarse desde el siguiente al en que tenga lugar la insercion de esta cédula en el Boletín oficial de la provincia y Gaceta de Madrid comparezcan a la Sala de Audiencia de este Juzgado para ofrecerles el sumario de referencia por si en él quieren mostrarse parte, y para ser reconocido facultativamente el Fernando, apéribidos que de transcurridos dichos días sin verificarlo le parará el perjuicio que hubiere lugar en derecho.

Puebla de Trives Junio 28 de 1878.—El originario, Benito Rodicio.

ANUNCIOS.

MANUAL DE PÓSITOS.

Recopilacion de las leyes, re-

glamento y disposiciones vigentes, relativas a tan importante ramo, concordadas y anotadas por D. José Viñas y Ortiz, Abogado del ilustre Colegio de Madrid, encargado del Negociado de Pósitos en el Ministerio de la Gobernacion.

Se vende en Madrid en casa del autor, calle del Arco de Santa Maria, 19, principal izquierda, al precio de dos pesetas.

Los pedidos se harán adelantando su importe en libranzas del Giro mutuo o letras de fácil cobro.

LA BURSÁTIL

MADRID.

RELATORES, 26, PRINCIPAL DERECHA.

Compra al contado y a los mas altos precios de Valores Públicos, 27 1/2 de Bancos y Sociedades, de Doses de 29 a 31 por 100 y Treses; Personal; Ferro-carriles; Caja de Depósitos; Bonos del Tesoro; Cupones y Carpetas de intereses y de Inscripciones de Ayuntamientos; Requisa y del Empréstito de 175 millones; Recibos al 26; nueve Décimos y Residuos al 29 y títulos completos al 33 por ciento.

Préstamos sobre valores al 6 por ciento anual.

La correspondencia se dirigirá al Gerente de *La Bursátil* y los valores en certificado, para reembolsar su importe.

¿YANO SE COSE A MANO!

LAS LEGÍTIMAS MÁQUINAS

"SINGER"

hacen, sin esfuerzo de quien las trabaja, mucha mas costura, mas igual y perfecta, en mucho menos tiempo que cualquier otra.

SE VENDEN A PLAZOS, desde 10 REALES semanales.

Así, cuando se paga un plazo de la maquina, esta ha dejado ya al interesado una utilidad muchas veces mayor que la cantidad desembolsada.

MÁS DE 2.000 CASAS

ESTABLECIDAS EN EUROPA SOLAMENTE, para la venta de estas renombradas maquinas garantizadas.

"SINGER"

para modistas, corseteras, sastres, guarnicioneros, zapateros, fabricantes de camisas, cuellos, puños, corsets, cortes de botinas, guarnecedoras, y para toda persona, en fin, que necesito coser cualquier cosa y en cualquier forma.

Pidanse Catálogos ilustrados, con listas de precios y las condiciones de venta a plazos, en el

DEPÓSITO DE ORENSE,

50, PAZ, 50.

ORENSE: DIA DE J. A. RANOS.